Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a treinta de abril de dos mil veinticinco.

**Visto** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **02344/INFOEM/IP/RR/2025**, interpuesto por **XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX,** en lo sucesivo **la parte** **Recurrente,** en contra de la respuesta a su solicitud con número de folio **00172/SF/IP/2025,** por parte de la **Secretaría de Finanzas,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **dieciséis de febrero del dos mil veinticinco,** la parte **Recurrente** presentó su solicitud de acceso a la información ante el **Sujeto Obligado**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** sin embargo, al corresponder a un día inhábil se tuvo por presentada el día **diecisiete de febrero de dos mil veinticinco;** mediante la cual requirió lo siguiente:

En relación con el Anexo de Ejecución 0236/2024 celebrado entre el Ejecutivo Federal, Gobierno del Estado de México y el Colegio de Bachilleres, el 10 de enero de 2024, que incluye el Apartado Analítico de servicios personales 2024, plazas, horas y sueldos autorizados, la siguiente información:

*“●Monto total individualizado asignado a mi plaza como ingreso bruto, que debí y debo percibir, por este año 2024;*

*● Monto detallado anual que debió aplicarse por concepto tanto de percepciones como de deducciones -cuyos conceptos se especificaron- respecto del ejercicio 2024.*

*● En caso de que exista diferencia salarial entre lo autorizado en el Anexo de Ejecución y lo que realmente se ha pagado en 2024, se informe el monto que dejé de percibir y los conceptos, en los cuales se aplicó la deducción.”*

La persona solicitante adjuntó lo siguiente:

- Digitalización por ambos lados de la Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a favor de la persona solicitante en el presente asunto.

- Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24, celebrado entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Gobierno del Estado de México, asistido por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Colegio de Bachilleres del Estado de México, (COBAEM), el diez de enero de dos mil veinticuatro.

**Modalidad de Entrega:** A través **del SAIMEX.**

**2. Información que Puede estar en Poder de Otro Sujeto Obligado.** El **veinte de febrero de dos mil veinticinco**, el **Sujeto Obligado** declaró su incompetencia para atender la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“Sobre el particular, sírvase encontrar en archivo adjunto copia del Acuerdo de Incompetencia de fecha 18 de febrero de 2025, mediante el cual se detalla incompetencia de este Sujeto Obligado” (Sic)*

Asimismo, adjuntó el Acuerdo de incompetencia mediante el cual refiere en lo medular, que la información requerida no es competencia de la Secretaría de Finanzas, al corresponder al Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de México, conforme a su Manual General de Organización, así como a la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor, conforme a su Reglamento Interior y su Manual de Organización, en consecuencia, se sugiere formular su solicitud ante dichos Sujetos Obligados.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la declaración de incompetencia, emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **dos de marzo de dos mil veinticinco**, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX**, sin embargo, al ser un día inhábil, de conformidad con el Calendario Oficial en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el medio de impugnación se tuvo por presentado al día hábil siguiente que es el **cuatro de marzo de dos mil veinticinco,** en donde se manifestó en los términos que a continuación se detallan:

**Acto Impugnado*:***

*“Oficio de respuesta suscrito por David Arturo Gómez Becerril, Encargado de la UIPPE y de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas que recayó a esta solicitud y por el cual se está presentando el presente Recurso de Revisión EN TIEMPO Y FORMA.” (sic)*

**Motivo de inconformidad:**

*“****La declaración de incompetencia de la Secretaría de*** *Finanzas del Estado de México, lo cual es notoriamente improcedente y contrario a derecho y a las facultades legales con las cuales se obligó y suscribió el "ANEXO DE EJECUCIÓN QUE CELEBRÓ EL EJECUTIVO FEDERAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASISTIDO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO EN FECHA 10 DE ENERO 2024." Por lo que SÍ es competente la Secretaría de Finanzas, para emitir la respuesta solicitada. Toda vez que esta Secretaría es la responsable, en términos del ANEXO DE EJECUCIÓN mencionado, de la captación y dispersión de los recursos Federales y Estatales asignados al Colegio de Bachilleres del Estado de México; asimismo y toda vez que la solicitud inicial requiere de datos personales de esta parte solicitante, anexo mi credencial de elector para acreditar mi personalidad con la que me ostentó en el presente recurso de revisión y sea procedente el mismo.” (sic)*

La parte **Recurrente** adjuntó nuevamente la digitalización por ambos lados de su Credencial para Votar, así como el Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24, referidos con antelación.

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** El **siete de marzo de dos mil veinticinco,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones e Informe Justificado**. El **doce de marzo de dos mil veinticinco**, el Sujeto Obligado rindió su informe justificado, mediante el cual ratificó en lo sustancial la respuesta inicial respecto a la declaración de incompetencia, no obstante, se hizo del conocimiento de la persona solicitante con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho estimara conveniente.

El **catorce de marzo de dos mil veinticinco,** la **parte Recurrente**, adjuntó nuevamente la digitalización por ambos lados de su Credencial para Votar, así como el Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24.

**7. Reconducción de Vía.** El **siete de abril de dos mil veinticinco,** se notificó a las partes, el acuerdo por el que se recondujo la vía para dar tratamiento al presente Recurso de Revisión, vía Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición –para posteriores referencias, Derechos ARCO-, toda vez que se determinó que la parte **Recurrente** solicitó acceso a sus datos personales, asimismo, atento a lo dispuesto en los artículos 11, 127 y 131 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y 185 fracciones I, II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria, se acordó lo siguiente:

a) Tener por acreditada la identidad de la parte **Recurrente** dentro del presente Recurso de Revisión.

b) El requerimiento a las partes para que en un plazo no mayor a siete días manifestaran, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se tendría por precluido su derecho, para tales efectos; y

**8. Conciliación.** La parte **Recurrente** **expresó su voluntad para conciliar en el presente asunto**, el **ocho de abril de dos mil veinticinco**, a través del SAIMEX, mientras que el **Sujeto Obligado,** el **veintidós de abril de dos mil veinticinco**, adjuntó el oficio número 20700004S/UT-0750/2025, mediante el cual manifiesta medularmente que **no es posible llevar a cabo la conciliación**, en virtud de que no cuenta con la competencia para conocer de la información solicitada.

**9. Preclusión y cierre de instrucción.** El **veintidós de abril de dos mil veinticuatro**, ante la inexistencia de una voluntad recíproca para conciliar en el presente asunto se tuvo por prelucido el derecho de las partes para llevar a cabo la conciliación, y al no existir actuación procesal pendiente que llevar a cabo en el presente asunto, se decretó el cierre de instrucción con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente**, conforme a lo dispuesto en los artículos 5°, párrafos trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo noveno, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 127, 129, 133 y 135 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios supletoria de la Ley de Protección de Datos Personales para la sustanciación de recursos de revisión; 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión.** De conformidad con los requisitos de Oportunidad y Procedibilidad que deben reunir los recursos de revisión interpuestos, previstos en los artículos 128 y 130 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; en la especie se advierte que el presente medio de impugnación fue interpuesto dentro del plazo de quince días previsto en el primer artículo de referencia; toda vez que el **Sujeto Obligado**, declaró su incompetencia para atender la solicitud de información de la parte **Recurrente**, el **veinte de febrero del año dos mil veinticinco,** mientras que **la parte** **Recurrente** interpuso su recurso de revisión el **cuatro de marzo de dos mil veinticinco**, esto es al **séptimo día hábil** de tener conocimiento de la incompetencia para atender la solicitud de información, por lo que se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo 128 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y, por tanto, su interposición se considera oportuna.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por **la parte** **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 129, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales aplicable a la entidad, que a la letra dice:

*“****Artículo 129.*** *El recurso de revisión procederá en los supuestos siguientes:*

*…*

***III. Se declare la incompetencia por el responsable.;”***

*(Énfasis añadido)*

**Tercero. Estudio de fondo del asunto.** En primer término, es de señalar que el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ARCO, se encuentra regulado por el artículo 6 apartado A, fracción II, párrafo primero, y 16, párrafo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente:

*“****Artículo 6o.***

*…*

***A.*** *Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*…*

***II.******La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida*** *en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención.  
...*

***Artículo 16.*** *Toda persona* ***tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,*** *rectificación y cancelación de los mismos, así**como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley,**la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”*

Derivado de lo anterior, se desprende que **la protección de datos personales** es un derecho fundamental, así como la información referente al ámbito privado de las personas, los cuales deben estar protegidos en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Ante tal premisa se puede apreciar que la inclusión **del derecho al acceso de datos personales en nuestra Constitución permite que cualquier persona -titular de datos personales obtenga la protección en esta materia.**

En este sentido, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, señala expresamente que:

*“****Artículo 4****. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:*

*…*

***XI.******Datos personales****: a la información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad, y que esté almacenada en los sistemas y bases de datos, se considerará que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico.*

*…*

***XIII.******Derechos ARCO:*** *a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales.*

*…*

***XLI. Responsable: a los sujetos obligados a que se refiere la presente Ley que deciden sobre el tratamiento de los datos personales****.*

*…*

***L. Tratamiento: a las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.***

*…*

***Artículo 98. El titular tiene derecho a*** *acceder,* ***solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los sujetos obligados****,* ***así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto****,* ***las cesiones realizadas o que se pretendan realizar,*** *así como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto.****”***

En función de la normativa señalada, se desprenden las premisas siguientes:

Primero, por datos personales se entenderá la información concerniente a una persona física identificada o identificable; y que se considera que una persona es **identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información**.

De igual manera, se destaca que en todo momento el **titular podrá solicitar al responsable**, el acceso, rectificación, cancelación u **oposición** -derechos ARCO- al tratamiento de los datos personales que le conciernen.

En la **recepción y trámite** de las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO,que se formulen a los sujetos obligados**, se sujetará al procedimiento establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados**, **en consonancia con el Título Décimo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios** y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Para el alcance en materia de protección de datos personales, así como para su tratamiento, debemos considerar todas las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relativas a **su obtención**, **uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento divulgación, difusión, transferencia o disposición**.

Es así que, los derechos ARCO es el derecho humano con que cuenta una persona para la protección de sus datos personales, en posesión de Sujetos Obligados y el tratamiento de los mismos deber de sujetarse a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.

Expuesto lo anterior, se procede al análisis de la totalidad de las constancias que integran el expediente electrónico del SAIMEX, con **el objeto de determinar si la respuesta e informe justificado del Sujeto Obligado son adecuados y suficientes para satisfacer el derecho de acceso a los datos personales de la parte Recurrente, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de la documentación solicitada.**

Ahora bien, del análisis de la solicitud de acceso a datos personales, que motiva el recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que **la parte** **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado o Responsable** le proporcione, información consistente en lo siguiente:

En relación con el Anexo de Ejecución 0236/2024 celebrado entre el Ejecutivo Federal, Gobierno del Estado de México y el Colegio de Bachilleres, el 10 de enero de 2024, que incluye el Apartado Analítico de servicios personales 2024, plazas, horas y sueldos autorizados, la siguiente información:

*“●Monto total individualizado asignado a mi plaza como ingreso bruto, que debí y debo percibir, por este año 2024;*

*● Monto detallado anual que debió aplicarse por concepto tanto de percepciones como de deducciones -cuyos conceptos se especificaron- respecto del ejercicio 2024.*

*● En caso de que exista diferencia salarial entre lo autorizado en el Anexo de Ejecución y lo que realmente se ha pagado en 2024, se informe el monto que dejé de percibir y los conceptos, en los cuales se aplicó la deducción.”*

Derivado de esta solicitud, el **Sujeto Obligado** declaró la incompetencia total para atender la presente solicitud de información, asimismo refirió que puede ser competente para atender la presente solicitud el Colegio de Bachilleres del Estado de México y la Oficialía Mayor.

Una vez conocida la respuesta, **la parte Recurrente** interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, inconformándose por la incompetencia alegada por el **Sujeto Obligado.**

Durante la etapa de manifestaciones, se tiene constancia que en el informe justificado, la Secretaría de Finanzas ratificó la incompetencia total para atender el requerimiento de información, mientras que la persona solicitante adjuntó la digitalización por ambos lados de la Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y el Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24, los cuales son coincidentes en contenido con los remitidos desde la solicitud de acceso a la información.

Una vez analizado el expediente del recurso de revisión que se resuelve en este acto, este Organismo Garante determinó que el procedimiento de acceso a la información pública no es la vía para su tramitación, por lo que se determinó su atención en términos del ejercicio del derecho de acceso a datos personales, toda vez que este Instituto, al igual que otros Organismo Garantes como el entonces Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) se han pronunciado por la procedencia de los recursos de revisión según la materia de la solicitud.

Discernimiento que encuentra apoyo en el criterio orientador **008/2009** del entonces INAI, que a la letra dispone lo siguiente:

*“****Las dependencias y entidades deberán dar trámite a las solicitudes aun cuando la vía en la que fueron presentadas -acceso a datos personales o información pública- no corresponda con la naturaleza de la materia de la misma.******Todas aquellas solicitudes cuyo objetivo sea allegarse de información pública y que sean ingresadas por la vía de acceso a datos personales, así como el caso contrario, deberán ser tramitadas por las dependencias y entidades de conformidad con la naturaleza de la información de que se trate, sin necesidad de que el particular requiera presentar una nueva solicitud.***

*De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ésta tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otro órgano federal. Por su parte, el artículo 4 de la Ley en cita señala que entre sus objetivos se encuentra el de “proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos”. De igual forma, el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que en la interpretación de la referida Ley y de su Reglamento “se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados”. Considerando lo establecido en los artículos citados, este Instituto determina que, a efecto de cumplir con los objetivos de la ley de la materia y en aras de garantizar el acceso a través de procedimientos sencillos y expeditos, favoreciendo también el principio disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, éstos deben subsanar los errores en que incurran los particulares al elegir la vía por la que los particulares presentan sus solicitudes.* ***Por consiguiente, en el caso que los particulares ingresen solicitudes de acceso a datos personales cuando, en realidad, la información solicitada corresponde a información pública, o viceversa, las dependencias y entidades deberán darles el trámite correspondiente de conformidad con la naturaleza de la información solicitada****.” (Énfasis añadido)*

Lo anterior, bajo el principio de expeditez[[1]](#footnote-1) “*que consiste en que la impartición de justicia debe estar libre de estorbos, lo que significa que el poder público —en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial— no puede supeditar el acceso a los tribunales a la satisfacción de condiciones innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad”,* determina procedente dar trámite a la solicitud formulada por la parte **Recurrente** bajo el procedimiento de acceso a los datos personales previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, de conformidad con el artículo 1 de la Ley referida la misma tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos obligados, de tal forma, en la resolución del presente asunto resulta aplicable la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Aunado a lo anterior, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, reformados el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, vigentes a la fecha de la solicitud, disponen lo siguiente en su lineamiento **trigésimo noveno**:

*“****Trigésimo noveno****. Los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares.*

***En caso de que el titular de los datos o su representante realice una solicitud de acceso a la información donde se encuentren sus datos personales, los sujetos obligados deberán reconducir la solicitud y atenderla en términos de las leyes aplicables al ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Dando acceso a los datos previa acreditación de la identidad o personalidad del mismo, en términos de las disposiciones normativas aplicables.***

*En caso de que los documentos puestos a disposición del titular de los datos contengan información pública, además de sus datos personales, no deberá testarse ésta.*

*Ante las solicitudes de acceso en las que se requieran datos personales de terceros que obren en una fuente de acceso público o en un registro público, los sujetos obligados en cumplimiento al principio de finalidad deberán orientar al solicitante para que acuda a aquél en el que se encuentre la información y la obtenga mediante el procedimiento establecido para tal fin.” (Énfasis añadido)*

Teniendo esto en cuenta, este Instituto aperturó la fase de conciliación, en la cual **la parte Recurrente** **expresó su voluntad para conciliar en el presente asunto**, mientras que el **Sujeto Obligado** manifestó medularmente que **no es posible llevar a cabo la conciliación**, en virtud de que no cuenta con la competencia para conocer de la información solicitada, por lo que ante la inexistencia de una voluntad recíproca para conciliar en el presente asunto se cerró la etapa conciliatoria.

Asimismo, es de suma importancia mencionar que en el escrito mediante el cual la parte **Recurrente** manifestó su voluntad de conciliar se advierte que hizo referencia a la conciliación pero bajo la entrega por parte del **Sujeto Obligado** de “*documentos donde se deslinden de la responsabilidad del Anexo de Ejecución 2024, al que se obligaron, presentando para tal efecto los recibos, trasferencia, acuses o documento fehaciente donde acredite y demuestre que entregó el recurso económico tanto Federal como el Estatal al Colegio de Bachilleres del Estado de México*”.

Al respecto, debe mencionarse que la parte **Recurrente** pretendió ampliar su solicitud, pues como se advierte, requirió que el **Sujeto Obligado** proporcionara los documentos donde se deslinda de la responsabilidad del Anexo de Ejecución 2024, presentando recibos, transferencia, acuses o documento fehaciente donde acredite y demuestre que entregó el recurso económico tanto Federal como el Estatal al Colegio de Bachilleres del Estado de México; sin embargo, dicha información no fue requerida al momento de presentar la solicitud de información, como se desprende de los antecedentes de la presente resolución, y de las constancias que obran en el expediente electrónico del SAIMEX. En este sentido, dichos pronunciamientos se traducen como una *plus petitio****,*** y por tanto inatendibles a través del recurso de revisión.

En este orden de ideas, una vez formulada su solicitud inicial,los particulares no pueden modificarla o ampliarla a través de posteriores promociones o en el momento de ingresar su recurso de revisión y menos aún si les fue otorgada la oportunidad para su ampliación, por tanto, la materia de las solicitudes de información se circunscribe a que se permita el acceso a los documentos inicialmente solicitados y en su caso a los aclarados o corregidos.

Robustece lo anterior lo plasmado en el Criterio orientador con clave de control SO/001/2017, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto lo que a continuación se transcribe:

*“****Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de la interposición del recurso de revisión.*** *En términos de los artículos 155, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud de información inicial, los nuevos contenidos no podrán constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva****.****”*

No obstante, se dejan a salvo los derechos de la persona solicitante para que, en caso de considerar conveniente a sus intereses, el conocer la información que fue señalada, la solicite a través de una nueva solicitud de información.

Precisado lo anterior, es de retomar que, del análisis a la solicitud que dio origen al recurso de revisión de nuestra atención, se advierte que la parte **Recurrente** pretendió ejercer uno de los derechos ARCO, como es el de acceso a datos personales, ello en virtud de que requiere el monto total individualizado asignado a su plaza como ingreso bruto, que debió y debe percibir, por el año 2024; el monto detallado anual que debió aplicarse por concepto tanto de percepciones como de deducciones -cuyos conceptos se precisaron-, respecto del ejercicio 2024, y en caso de que exista diferencia salarial entre lo autorizado en el Anexo de Ejecución y lo que realmente se ha pagado en 2024, se le informe el monto que dejó de percibir y los conceptos, en los cuales se aplicó la deducción.

Por lo que, una vez establecidas las posturas de las partes, se procede al análisis de los requerimientos de información, así como la información proporcionada por el **Sujeto Obligado,** en contraposición con el motivo de inconformidad alegado por la parte **Recurrente,** con la finalidad de determinar si el Derecho de acceso de esta se satisfizo, o, en su defecto, ordenar el soporte documental correspondiente, en caso de ser procedente.

En este tenor, toda vez que el **Sujeto Obligado** se declaró incompetente para dar atención a la solicitud y que este es el motivo de inconformidad hecho valer por la parte **Recurrente**, se estima necesario abordar, en primera instancia, la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente pues de ella deriva la validez de los actos que se emiten, los cuales las autoridades solo pueden realizar en los términos que les ordena la ley.

Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia con número de registro 170827, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben:

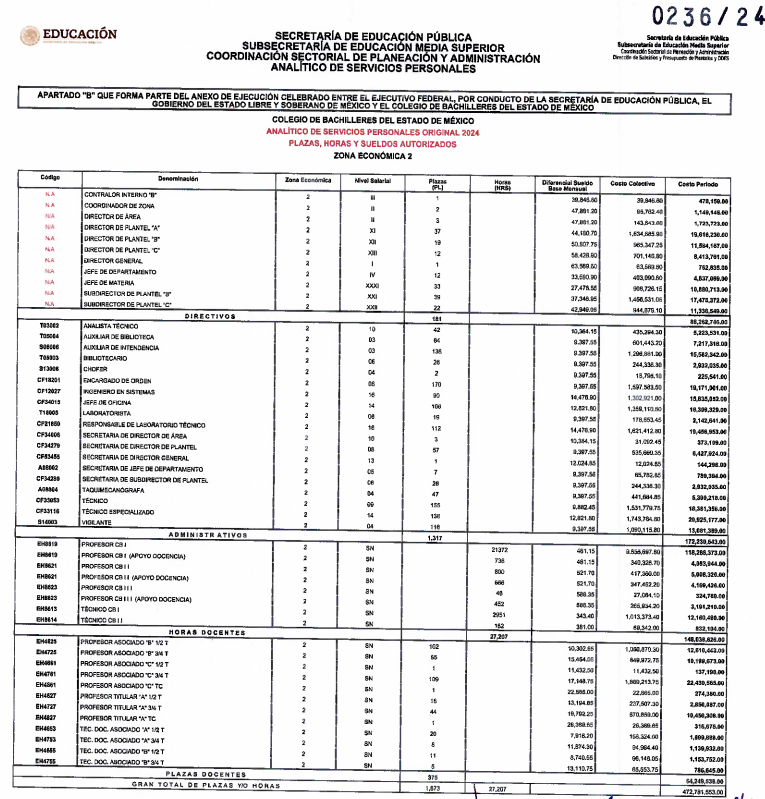
*“****COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA****.- El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,* ***establece que ese Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada.*** *Al respecto debe decirse que ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que* ***en el caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada;*** *sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.”*

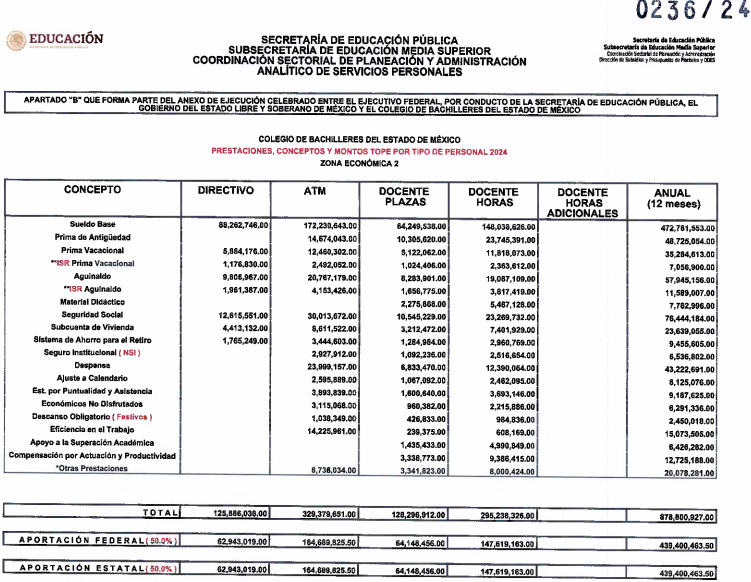
El estudio preferente del principio de competencia, entendido en su origen como la aptitud atribuida expresamente a una autoridad, por una norma jurídica, para llevar a cabo determinadas conductas o actos, tiene su justificación en la protección y seguridad del gobernado a efecto de que tenga el conocimiento cierto de quién es la autoridad que emite el acto o resolución que lo afecta jurídicamente, para tener la posibilidad de verificar si dicha autoridad tiene o no atribuciones o facultades para conocer respecto de los actos de molestia, y esté en posibilidad de oponer sus defensas.

Una vez acotado lo anterior, respecto a la materia de la solicitud es oportuno mencionar que el objeto del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24, celebrado entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Gobierno del Estado de México, asistido por la **Secretaría de Finanzas** y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Colegio de Bachilleres del Estado de México, (COBAEM), en términos de su Cláusula Primera, consiste en establecer las bases conforme a las cuales la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de México, proporcionarán subsidio al COBAEM, durante el ejercicio 2024, a fin de contribuir al financiamiento de sus gastos de operación, es decir, el costo del analítico de servicios personales que comprende el número de plazas y horas, prestaciones y conceptos autorizados, con base en los catálogos de puestos/categorías y tabuladores de sueldos, así como en las prestaciones autorizadas a los organismos descentralizados estatales vigentes, emitidos por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública; adquisición de materiales y suministros -capítulo 2000- y servicios generales– capítulo 3000-, de conformidad con lo establecido en los Apartados “A” y “B” firmados por las partes, que forman parte integrante del Acuerdo.

Lo anterior, en cumplimiento al Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo financiero del el COBAEM suscrito por la SEP y el Gobierno del Estado de México el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis, en cuya cláusula Novena convinieron concurrir en partes iguales a la integración del presupuesto anual de operación; y al Convenio Marco de Coordinación para Promover y Prestar en el Estado de México Servicios Educativos del Tipo Medio Superior dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, así como para fortalecer la formación para el trabajo, celebrado el treinta de junio de dos mil nueve, en cuyas Cláusulas Trigésima Séptima y Cuadragésima Cuarta se prevé que las partes operarán dicho instrumento a través de los oficios de autorización que expida la SEP, o bien mediante la suscripción de anexos de ejecución, anuales y específicos por cada uno de los organismos públicos descentralizados que operen en la entidad.

En este contexto, la solicitud de información se presentó tomando como referencia el Apartado “B” correspondiente al Analítico de servicios personales 2024, plazas, horas y sueldos autorizados, del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24:





Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis del marco normativo aplicable al **Sujeto Obligado,** con la finalidad de determinar sus atribuciones, y si estas se vinculan con la materia de la solicitud.

* **De la esfera competencial de la Secretaría de Finanzas**

En este tenor, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Secretaría de Finanzas es la dependencia encargada de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, en los ámbitos de su competencia.

Sus atribuciones se contemplan en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública:

***Artículo 29****. La Secretaría de Finanzas contará con las siguientes atribuciones:*

***I.*** *Formular y someter a consideración del Poder Ejecutivo, bajo los principios de austeridad y equidad, los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para la planeación, programación, presupuestación, y evaluación de la actividad económica y financiera del Estado, así como para la actividad fiscal y tributaria en el marco del sistema de planeación democrático;*

***II.******Establecer políticas en materia hacendaria, así como recaudar los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos, que correspondan al Estado****;* ***y las contribuciones federales y municipales en los términos de los convenios suscritos, conforme a las leyes estatales y generales aplicables****, mediante designación directa de las personas servidoras públicas consideradas en la Ley, cualesquiera de sus facultades otorgadas por los propios convenios suscritos, excepto aquéllas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por la propia persona titular de la Secretaría;*

***III****. Instrumentar, vigilar y buscar asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter fiscal y las demás de su ramo, aplicables en el Estado;*

***IV****. Ejercer en el ámbito de su competencia las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, con los gobiernos de otros estados de la República, con los gobiernos municipales y con organismos auxiliares;*

***V****. Formular y presentar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, los proyectos de Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y el programa general del gasto público;*

***VI****. Practicar revisiones y auditorías a los causantes para prevenir la evasión y elusión, y en su caso, determinar créditos fiscales y precisar las bases para su liquidación;*

***VII****. Formular mensualmente los estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la primera quincena del mes de enero, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior;*

***VIII****. Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes relativas, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor del Estado;*

***IX.*** *Establecer, administrar, integrar, controlar, verificar y mantener actualizados, el padrón fiscal de contribuyentes y demás registros relacionados, conforme a las disposiciones legales aplicables;*

***X****. Cuidar que las personas empleadas que manejen fondos del Estado otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo en los términos que determine la ley;*

***XI****. Dictar las normas relacionadas con el manejo de fondos y valores de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del Estado, así como custodiar los documentos que constituyen valores, acciones y demás derechos que formen parte del patrimonio del Estado y los de los particulares reintegrables;*

***XII****. Acordar con la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, la negociación de contratación, refinanciamiento y reestructura de la deuda pública estatal, llevar su registro y control; así como vigilar y registrar la de los municipios, informándole periódicamente sobre su estado y conformación;*

***XIII****. Dirigir, regular, controlar, supervisar y evaluar las actividades de las personas servidoras públicas en las oficinas recaudadoras físicas y virtuales, así como de orientación y asistencia a las personas contribuyentes en el Estado;*

***XIV****.* ***Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados, así como, formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros y tributarios del Estado****;*

***XV****. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado la cancelación de cuentas incobrables, así como el otorgamiento de subsidios fiscales en los casos en que proceda;*

***XVI.*** *Proporcionar asesoría en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias, presupuestales y administrativas de su competencia que le sea solicitada por las dependencias y entidades de la Administración Pública, por los ayuntamientos y por los particulares, así como realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal;*

***XVII****. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia e intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal cuando tenga interés la Entidad. En materia de impuestos federales coordinados, en representación de la Entidad y en cumplimiento de los convenios y acuerdos de coordinación fiscal, tendrá las siguientes facultades:*

***a)*** *Intervenir como parte en los juicios contra resoluciones o actos emitidos por la Entidad en ejercicio de sus facultades por ingresos federales ya sea por sí o a través de las dependencias u organismos auxiliares de la Administración Pública, sin perjuicio de la intervención que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o al Servicio de Administración Tributaria;*

***b)*** *Ejercer las acciones, oponer las excepciones y defensas que correspondan a los actos emitidos por la Entidad en los juicios;*

***c)*** *Intervenir en su carácter de autoridad ejecutora, en los juicios interpuestos contra requerimientos de pago a cargo de instituciones de fianzas con base en pólizas que se hayan expedido para asegurar el interés fiscal;*

***d)*** *Interponer recurso de revisión en nombre y representación de la Entidad y de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, en contra de las sentencias y resoluciones ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por conducto de las Salas, Secciones o Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las dictadas en el Juicio en Línea, en relación con los juicios en que el propio Estado haya intervenido como parte.*

*Para el ejercicio de las atribuciones contenidas en esta fracción, la persona titular de la Secretaría de Finanzas se auxiliará de la persona titular de la Procuraduría Fiscal y sus direcciones de área, jefaturas de departamento y demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo, quienes tendrán las atribuciones de representación de la Entidad que ejerza la persona titular de la Secretaría de Finanzas;*

***XVIII.*** *Fijar las políticas, normas y lineamientos generales en materia de catastro, de acuerdo con las leyes respectivas;*

***XIX.*** *Elaborar con la participación de las dependencias y organismos auxiliares, así como con la participación ciudadana, el Plan de Desarrollo del Estado de México que se pondrá a consideración de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo consideraciones y proyecciones de largo alcance, así como los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales y anuales que requiera la Entidad, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;*

***XX.*** *Establecer la coordinación de los programas de desarrollo socioeconómico del Gobierno del Estado, con los de la Administración Pública Federal y la de los municipios de la Entidad, promoviendo la participación en los mismos de los sectores social y privado; así como recibir, concentrar y administrar los ingresos y recursos financieros provenientes de los mismos, en apego a las disposiciones legales aplicables;*

***XXI****. Solicitar a la Oficialía Mayor el diseño, implementación y actualización de todos los sistemas informáticos indispensables para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como: de ingresos, del gasto público, de contabilidad gubernamental, disciplina financiera y estadística y demás apegadas a las disposiciones legales aplicables;*

***XXII****. Planear, autorizar, coordinar, vigilar y evaluar los programas de inversión pública de las dependencias del Ejecutivo y de sus organismos auxiliares, para que se realicen conforme a los objetivos de los planes de desarrollo aprobados y la normatividad competente;*

***XXIII.*** *Proyectar y calcular los egresos del Gobierno del Estado y los ingresos y egresos de sus organismos auxiliares;*

***XXIV.*** *Garantizar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de las reglas y criterios de disciplina financiera, equilibrio presupuestario y responsabilidad hacendaria, en términos de la legislación en la materia;*

***XXV****. Establecer y llevar los sistemas de contabilidad gubernamental, disciplina financiera y de estadística general del Gobierno del Estado;*

***XXVI.*** *Realizar periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios, remitiendo los resultados a la dependencia del Gobierno Federal competente;*

***XXVII.*** *Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información financiera que solicite la autoridad federal competente, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo la necesaria para la evaluación del Sistema de Alertas a que se refiere el artículo 43 de la mencionada Ley;*

***XXVIII****. Celebrar convenios con los entes públicos estatales que se ubiquen en un nivel de endeudamiento elevado, con el objeto de establecer obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria;*

***XXIX****. Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, elaborar la cuenta pública y mantener las relaciones con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;*

***XXX.*** *Registrar y normar los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado;*

***XXXI.*** *Determinar el destino final tratándose de tráileres, autobuses y cualquier tipo de remolques, una vez declarados abandonados;*

***XXXII****. Instrumentar e intervenir en el otorgamiento de los subsidios, aportaciones, ayudas, transferencias y financiamiento temporal a las dependencias, municipios, instituciones o particulares, con el objeto de comprobar que la inversión se efectúe en los términos establecidos de conformidad con la legislación aplicable y las disposiciones normativas que para estos efectos se emitan;*

***XXIII****. Prestar a los municipios, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesario para la elaboración de sus planes y programas de desarrollo económico y social;*

***XXXIV****. Integrar y mantener actualizada la información geográfica y estadística de la Entidad;*

***XXXV.*** *Asesorar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado en la elaboración de los convenios que celebre el Gobierno del Estado en materia de planeación, programación, supervisión y evaluación del desarrollo de la Entidad;*

***XXXVI****. Vigilar que el desarrollo económico y social de la Entidad sea armónico, para que beneficie en forma equitativa a las diferentes regiones del Estado, evaluando periódicamente los resultados obtenidos, en términos simples y comprensibles;*

***XXXVI****I. Generar, requerir, analizar y consolidar con fines de inteligencia, información patrimonial, económica, financiera, fiscal, civil y cualquier otra que pudieran proporcionar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y presentarla a las autoridades competentes, a fin de prevenir y detectar los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro del territorio del Estado;*

***XXXVIII****. Colaborar en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y de la Oficialía Mayor para que, por conducto de esta última, se proponga a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado la emisión de las normas para la recepción y entrega de las unidades administrativas y organismos auxiliares que integran el Poder Ejecutivo;*

***XXXIX****. Expedir las placas de matriculación, calcomanías, tarjetas de circulación y demás elementos de identificación de los vehículos automotores destinados a transporte de carga, de uso particular y comercial, que no sean competencia de otras autoridades;*

***XL.*** *Emitir dictamen de viabilidad o la autorización, según sea el caso, respecto de la constitución de los fideicomisos públicos de los entes públicos, a través de sus unidades administrativas, dependencias u organismos auxiliares, verificar el debido cumplimiento de sus fines, así como registrar, supervisar y evaluar su funcionamiento en cualquier momento, solicitando la información que considere necesaria con base en los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría; Asimismo, participará en la constitución o celebración de fideicomisos públicos.*

***XLI****. Comparecer ante terceros con facultades para formular declaraciones en representación del Estado y celebrar convenios a través de los cuales el Estado pueda asumir obligaciones de hacer y no hacer en relación con operaciones de crédito, préstamo, empréstito, emisión de valores o financiamiento a cargo de fideicomisos en los que participe como fideicomitente un organismo público descentralizado, y obligarse a indemnizar del daño o perjuicio o la privación de cualquier ganancia lícita que se ocasione por el incumplimiento de dichas obligaciones de hacer y no hacer o por la inexactitud de sus declaraciones, sin que ello constituya deuda pública del Estado y siempre y cuando no se garanticen obligaciones a favor de terceros. En los convenios a que se refiere esta fracción, no se podrán pactar penas convencionales o predeterminar responsabilidades por daños y perjuicios en caso de incumplimiento. En los convenios antes mencionados que celebre el Estado se podrán estipular las cláusulas que se requieran incluyendo, entre otras, las aplicables a la jurisdicción;*

***XLII.*** *Hacer efectivas las garantías otorgadas bajo cualquier modalidad a favor del Gobierno del Estado de México, mediante los procedimientos previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Para el ejercicio de la atribución contenida en esta fracción, la persona titular de la Secretaría se auxiliará de la persona titular de la Procuraduría Fiscal, en su carácter de autoridad ejecutora, a fin de hacer efectivas las pólizas de fianza otorgadas a favor del Gobierno del Estado;*

***XLIII****. Implementar, desarrollar y fomentar, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la política de Gobierno Digital y el uso estratégico de tecnologías de la información en el ejercicio de la gestión pública dentro de la Entidad;*

***XLIV****. Emitir, en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, los lineamientos técnicos en materia de Gobierno Digital conforme a lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables;*

***XLV.*** *Dar asesoría en materia de Gobierno Digital a los sujetos de la Ley de Gobierno Digital, teniendo como base la normatividad aplicable en dicha materia;*

***XLVI****. Implementar y administrar el Registro Único de Personas Acreditadas del Estado de México, y realizar todas las acciones que de ello resulten. Para la realización de las acciones establecidas en esta fracción, la Secretaría deberá coordinarse con el Consejo Estatal de Gobierno Digital y con la Secretaría General de Gobierno, aplicando las disposiciones de la normatividad aplicable;*

***XLVII****. Implementar y administrar el Sistema Estatal de Información, Trámites y Servicios, en coordinación con el Consejo Estatal de Gobierno Digital y la Secretaría General de Gobierno;*

***XLVIII.*** *Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto;*

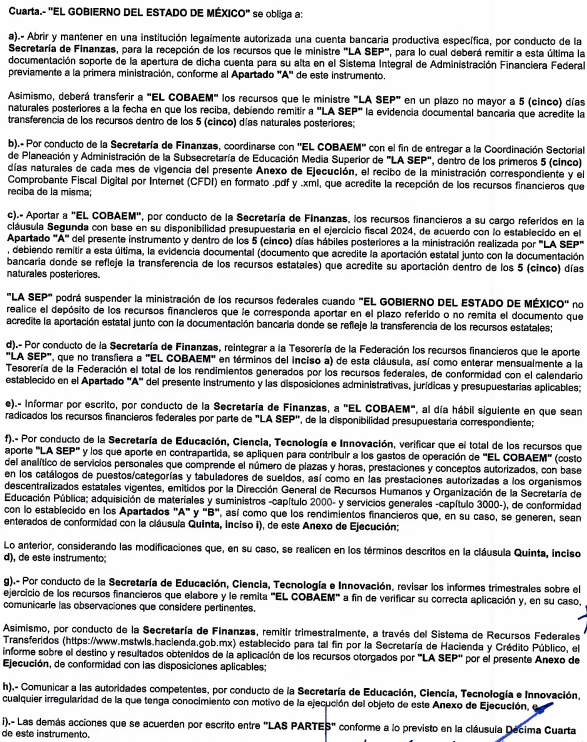
***XLIX.*** *Aplicar las políticas en materia de protección de datos personales respecto del almacenamiento y custodia de información que derive del ejercicio de sus atribuciones; y*

***L****. Realizar las estimaciones del impacto presupuestario de las iniciativas de leyes o de decretos que se presenten a la consideración de la Legislatura, que impliquen afectación al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, de conformidad a lo dispuesto por el Código Financiero y demás disposiciones legales aplicables;*

***LI.*** *Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, así como las que le encomiende la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.”*

Del precepto citado se desprende que el objetivo de la Secretaría de Finanzas consiste en administrar la hacienda pública estatal, a través de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, sin que se advierta la obligación de realizar los pagos y descuentos a los servidores públicos adscritos a las dependencias del Poder Ejecutivo, así como a los organismos auxiliares, como lo es el Colegio de Bachilleres del Estado de México, COBAEM.

Asimismo, es conveniente referir que, si bien, el **Sujeto Obligado** suscribió el Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24, junto con la Gobernadora Constitucional de la entidad y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la lectura del mismo tampoco se advirtió obligación alguna, que de manera específica se facultará a la Secretaría de Finanzas para realizar los pagos y descuentos a los servidores públicos adscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de México, tal y como se desprende de la Cláusula Cuarta del referido Anexo, en donde se estipulan las obligaciones del Gobierno del Estado para dar cumplimiento al mismo:



Como se puede observar, las obligaciones de la Secretaría de Finanzas se encuentran establecidas, específicamente en los incisos a), b), c), d) y e) del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24, las cuales se concretan a:

- La recepción de los recursos ministrados por la Secretaría de Educación Pública, a través de la apertura de una cuenta bancaria productiva específica en una institución bancaria autorizada.

- La transferencia de los recursos ministrados por la SEP al COBAEM, en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores a la fecha de recepción de los mismos, cuya evidencia documental debe ser remitida a la SEP, con la finalidad de acreditar la transferencia.

- La coordinación con el COBAEM, para efectos de entregas a la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, el recibo de ministración correspondiente, y el Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI, que acredite la recepción de los recursos.

- Aportar al COBAEM, los recursos financieros a su cargo, con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2024, dentro de los cinco días posteriores a la ministración realizada por la SEP, cuya evidencia documental, esto es, el documento que acredite la aportación estatal junto con la documentación bancaria donde se refleje la transferencia de los recursos estatales, debe ser enviada a esta última con la finalidad de acreditar la aportación del Gobierno del Estado.

- Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos financieros que aporte la SEP, que no se transfieran al COBAEM, así como los rendimientos generados por los recursos federales.

- Informar al COBAEM, al día siguiente en el que sean radicados los recursos financieros federales por parte de la SEP, de la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Con base en lo previo, se colige que existe una evidente incompetencia por parte del **Sujeto Obligado** para satisfacer lo solicitado, en términos del Criterio orientador con Clave de control SO/013/2017 emitido por el Pleno del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual, para pronta referencia se reproduce a continuación:

***“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada****; es decir, se trata de una cuestión de derecho,* ***en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido****; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.”*

* **Delimitación del ámbito competencial relativo a la información solicitada**

En primer término, toda vez que a través de la solicitud el particular pretendió ejercer su derecho de acceso a sus datos personales en calidad de servidor público adscrito al Colegio de Bachilleres del Estado de México, es necesario mencionar que este es un Organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que es imprescindible mencionar que la descentralización alude a un sistema propenso a transferir de un determinado centro de toma de decisiones un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades y recursos, en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se hallan en una situación de cierta subordinación, más no en una relación de jerarquía respecto del centro.

En todo aparato político o administrativo contemporáneo se advierte la presencia de la centralización y de la descentralización como fórmulas o directivas de organización coexistentes, que puede darse en diferentes ámbitos como el político, el administrativo o el económico, dando así origen a la descentralización política, administrativa o económica.

La descentralización administrativa, es una tendencia organizativa de la administración pública, conforme a la cual se confiere la personalidad jurídica propia a ciertos entes a los que se les otorga autonomía orgánica relativa, respecto del órgano central, para encargarles o encomendarles actividades administrativas.

En opinión del profesor Gabino Fraga, la descentralización administrativa estriba en confiar algunas actividades administrativas a órganos que guardan una relación que no es de jerarquía con la administración central, pero sin que dejen de existir, respecto de ellas, las facultades indispensables para conservar la unidad de poder[[2]](#footnote-2).

La descentralización administrativa implica la creación de personas jurídicas de derecho público, distintas al Estado y a la administración pública, y tiene diversas modalidades, como la territorial o regional, por servicio y por colaboración.

La descentralización administrativa por servicio significa una delegación de ciertas facultades de las personas morales territoriales -estado, provincia, municipio-, en favor del propio servicio que se personaliza, con recursos propios y con poder de decisión, sin que por ello se rompan sus vínculos con aquellas, porque se establecen relaciones jurídicas obligadas que fijan el régimen de derecho al que se someten tales servicios personificados.

En otras palabras, la descentralización por servicio, entraña la creación de una nueva persona jurídica de derecho público con una esfera de competencia, órganos propios y poder de decisión, sin perjuicio de que las personas morales territoriales, conserven determinadas facultades de intervención, pero que se caracteriza por tener autonomía jurídica, financiera y técnica.

Gracias a la autonomía jurídica que implica la descentralización administrativa por servicio, el órgano descentralizado tiene personalidad jurídica propia; en virtud de su autonomía financiera cuenta con patrimonio propio; y en razón de su autonomía técnica, goza de una reglamentación propia y especifica.

Así, pueden considerarse como las características más importantes de la descentralización administrativa por servicio las siguientes:

1. Su establecimiento mediante ley o decreto.

2. Personalidad jurídica propia.

3. Patrimonio propio.

4. Estatuto y regulación propios.

5. Realización de una actividad técnica.

6. Tutela y vigilancia por parte de la administración central.

En este sentido, el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Colegio de Bachilleres del Estado de México, se creó a través del Decreto de Ley número 147 de la H. “LII” Legislatura, publicado en la Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis, el cual señala, en su artículo 1º, que **dicho organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.**

Ahora bien, por cuanto hace a la materia de la solicitud, es oportuno traer a contexto el Manual General de Organización del Colegio de Bachilleres del Estado de México, cuyo contenido en su parte conducente, es el siguiente:

***210C0701040001L DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS***

***OBJETIVO:*** *Llevar a cabo las acciones de selección, contratación, registro, control, capacitación y desarrollo del personal adscrito al Colegio de Bachilleres, así como* ***llevar a cabo las acciones necesarias para el pago oportuno de sus remuneraciones****.*

*- Llevar a cabo los trámites para la contratación de personal, previa selección y análisis de la Dirección de Administración y Finanzas y autorización de la Dirección General, y* ***verificar que la asignación de puestos y de sueldos se ajusten a las plazas y a los tabuladores autorizados para el Estado****, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.*

*…*

*-* ***Elaborar las nóminas y pagar oportunamente las remuneraciones al personal; aplicar las sanciones y descuentos por concepto de retardos y faltas; Impuesto Sobre la Renta, sobre Sueldos y Salarios; cuotas al ISSEMyM, y otros impuestos y derechos de los y las trabajadoras del Colegio de Bachilleres.***

*…*

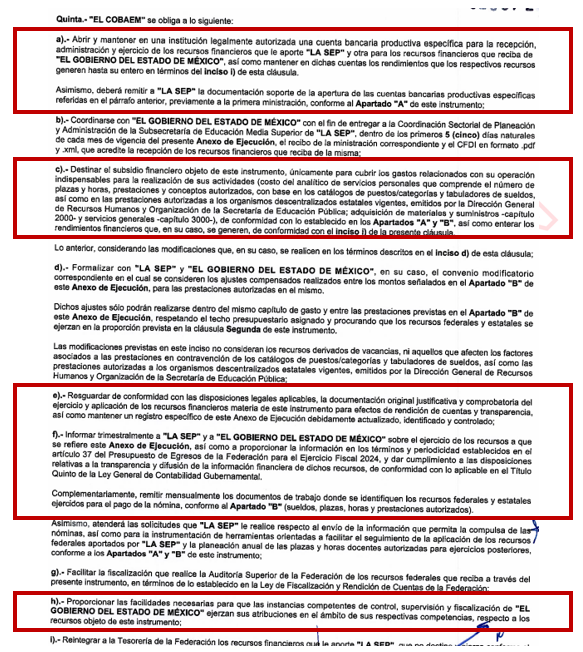
*- Informar detalladamente a la Subdirección de Planeación de Sueldos y Salarios del Sector Auxiliar de la Dirección de Política Salarial, de la plantilla y movimientos del personal adscrito al Colegio.*

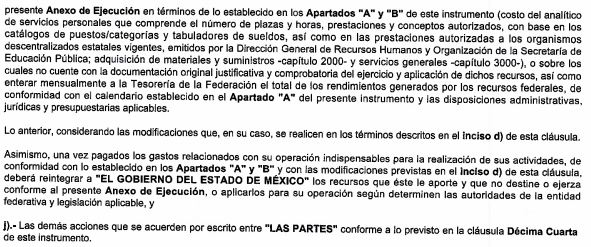
*…*

Como se observa, el Colegio de Bachilleres del Estado de México, a través del Departamento de Recursos Humanos, es responsable de llevar a cabo la selección, contratación, registro, control, capacitación y desarrollo del personal bajo su cargo, debiendo verificar que la asignación de puestos y de sueldos se ajusten a las plazas y a los tabuladores autorizados para el Estado, así como **elaborar las nóminas y pagar oportunamente las remuneraciones al personal**; **aplicar las sanciones y descuentos** **por concepto de retardos y faltas; Impuesto Sobre la Renta, sobre Sueldos y Salarios; cuotas al ISSEMyM, entre otros impuestos y derechos**.

Por lo tanto, se colige que **el Colegio de Bachilleres del Estado de México es, en primera instancia, el Sujeto Obligado que pudiera dar atención a la solicitud,** ya que cuenta con facultades para generar, administrar y/o poseer la información materia de las mismas, esto es, el pago de percepciones y la aplicación de descuentos de los servidores públicos bajo su adscripción.

Argumento que se robustece con el mismo Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24, el cual en su Cláusula Quinta establece las obligaciones que se le confieren al COBAEM:





Como se advierte, en los incisos a), c), e) f) y h), el COBAEM está facultado, para administrar y ejercer los recursos provenientes del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2024 SEMS-EL COBAEM-MÉXICO 0236/24, al estar obligado medularmente a lo siguiente:

- Aperturar dos cuentas bancarias productivas específicas en una institución bancaria autorizada para la recepción, administración y ejercicio de los recursos financieros que aporte la SEP, y el Gobierno del Estado.

- **Destinar el subsidio financiero objeto del Anexo de Ejecución, únicamente a cubrir los gastos relacionados con su operación indispensables para la realización de sus actividades,** esto es, **el costo analítico de servicios personales que comprende el número de plazas y horas, prestaciones y conceptos autorizados, con base en los catálogos de puestos/categorías y tabuladores de sueldos, así como en las prestaciones autorizadas a los organismos descentralizados estatales vigentes, emitidos por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública; adquisición de materiales y suministros –capítulo 2000- y servicios generales –capítulo 3000-,** de conformidad con los **Apartados** “A” y **“B”.**

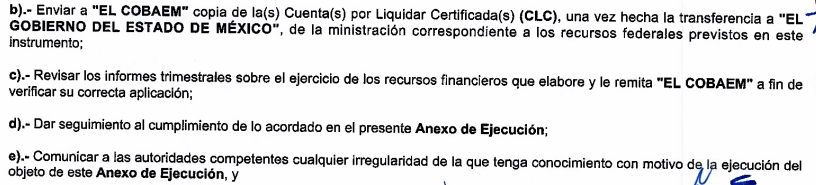
- Resguardar la documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos financieros materia del Anexo de Ejecución, para efectos de rendición de cuentas y transparencia, así como mantener un registro específico de este Anexo de Ejecución debidamente actualizado, identificado y controlado.

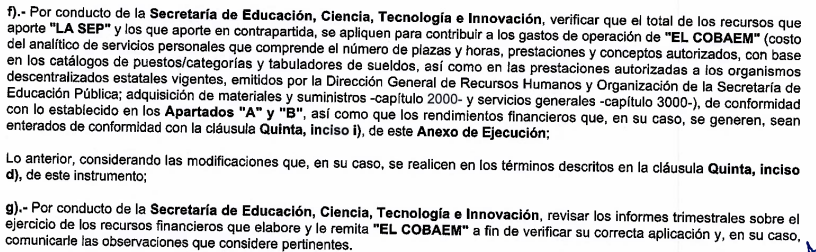
- Informar trimestralmente a la SEP y al Gobierno del Estado de México sobre el ejercicio de los recursos a los que se refiere el Anexo de Ejecución, y de manera complementaria, **remitir mensualmente los documentos de trabajo donde se identifiquen los recursos federales y estatales ejercidos para el pago de la nómina conforme al Apartado “B” (sueldos, plazas, horas y prestaciones autorizadas)**

- Proporcionar las facilidades necesarias para que las instancias competentes de control, supervisión y fiscalización del Gobierno del Estado de México ejerzan sus atribuciones en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto a los recursos objeto del Anexo de Ejecución.

Corolario a lo anterior, es imprescindible mencionar que la obligación prevista en la Cláusula Quinta, inciso f), del Anexo, guarda estrecha relación con las Clausulas Tercera, incisos c), d) y e), y Cuarta, incisos f), g), primer párrafo y h) del mismo anexo, que disponen lo siguiente:







En este tenor, se colige que **la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, también cuentan con competencia para conocer sobre la materia de la solicitud de información**, al ser las instancias responsables de **revisar los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos financieros que elabore y remita el COBAEM, a fin de verificar la correcta aplicación de los mismos**, reiterando que **dichos informes deben contener los documentos de trabajo donde se identifiquen los recursos federales y estatales ejercidos para el pago de la nómina, conforme al Apartado "B” (sueldos, plazas, horas y prestaciones autorizados)**, así como **verificar que los recursos aportados por la SEP y el Gobierno del Estado se apliquen específicamente para el objeto del Anexo de Ejecución,** debiendo comunicar a las autoridades competentes cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento con motivo de la ejecución del Anexo, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Atento a las consideraciones expuestas, no es procedente la entrega de información alguna para atender la solicitud de información, bajo la premisa de que los Sujetos Obligados sólo deben proporcionar aquella información que hubieran generado en el ejercicio de sus atribuciones y que obre en sus archivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria, lo que a *contrario sensu* significa que no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos, en consecuencia, el pronunciamiento vertido por la Unidad de Transparencia, es suficiente para tener por atendidos los requerimientos de información.

Dicho lo anterior, respecto a la Declaración de Incompetencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, de aplicación supletoria, establece en los artículos 49, fracción II y 167, lo siguiente:

*“****Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

***...***

***II.*** ***Confirmar, modificar o revocar*** *las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información* ***y declaración*** *de inexistencia o* ***de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;***

***...***

***Artículo 167****.* ***Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia*** *por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,* ***deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud*** *y,* ***en su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.”***

De los preceptos citados se desprende que es atribución del Comité de Transparencia confirmar, modificar o revocar, en su caso, la declaración de incompetencia, **en aquellos casos en los que no se trate de una notoria incompetencia.**

Puesto que la Ley también prevé que dicho acuerdo no es necesario cuando la Unidad de Transparencia determine que la incompetencia es notoria dando un plazo de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de la persona solicitante. En otras palabras, la Ley de la Materia confiere a las Unidades de Transparencia la posibilidad de notificar la incompetencia cuando ésta sea notoria, siendo innecesario que dicha circunstancia sea sometida a consideración de los integrantes del Comité de Transparencia para su aprobación.

Como sustento de lo anterior, resulta aplicable el Criterio Orientador 20/20, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“Declaración de incompetencia por parte del Comité, cuando no sea notoria o manifiesta.*** *Cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto obligado no sea clara en delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitante y resulte necesario efectuar un análisis mayor para determinar la incompetencia, ésta debe ser declarada por el Comité de Transparencia.”*

De igual manera, el Pleno de este Instituto, a través del Criterio 02/04 emitido en la Segunda Época, precisa los alcances del artículo 167 de la Ley de Transparencia, al señalar que corresponde al Comité de Transparencia confirmar la declaratoria de incompetencia y notificarle dicha determinación al particular, refiriéndose a aquellos casos en los que exista **duda razonable sobre la administración del documento materia de la solicitud de información**, como se lee enseguida:

***“DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. SUPUESTO PARA CONFIRMARLA POR ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.*** *De conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, las Unidades de Transparencia tienen la facultad de determinar la notoria incompetencia para atender las solicitudes de acceso a la información y comunicarla al solicitante dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la misma, así como en su caso, orientar al particular sobre el o los Sujetos Obligados competentes para su atención. No obstante, es importante resaltar que* ***al ejercer el derecho de acceso a la información pública cabe la posibilidad de que existan atribuciones concurrentes entre dos o más Sujetos Obligados que impiden determinar dentro del término legal de tres días hábiles, si se posee o no la información por el Sujeto Obligado requerid****o; en virtud de ello, en aras de disipar toda duda razonable sobre la administración del documento materia de la solicitud de información, el Sujeto Obligado deberá dar el trámite correspondiente a la solicitud de información a efecto de realizar un análisis minucioso de las facultades, competencias o funciones de cada una de las Unidades Administrativas que lo integran y, si posterior a ello, se corrobora la incompetencia para la atención del requerimiento, en razón de que es otro el Sujeto Obligado poseedor de la documentación, corresponde a su Comité de Transparencia confirmar la declaratoria de incompetencia y notificarle dicha determinación al particular, en términos de lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de Transparencia Local, al ser este el acto jurídico idóneo que genera seguridad jurídica de que el Ente ante quien se presentó la solicitud, carece de facultades, competencias o funciones para poseer o generar la información requerida; lo anterior, sin perjuicio de que pueda gestionar la colaboración de otro Sujeto Obligado competente para atender la solicitud.”*

En el caso particular, dado que se ha demostrado que la incompetencia del **Sujeto Obligado** es notoria, por lo tanto resulta innecesaria la emisión de una declaratoria formal de incompetencia a través del Comité de Transparencia.

Atento a lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la parte **Recurrente** para que, en caso de considerarlo oportuno formule las solicitudes de información ante los Sujetos Obligados competentes, para lo cual deberá tomar en consideración lo antes mencionado, atendiendo a la naturaleza de la información a la que pretenda acceder, esto es, acreditar su identidad y representación, así como la identidad de las personas titulares de los datos personales a los cuales se pretende acceder.

Derivado de lo expuesto, dado que el **Sujeto Obligado** informó de la notoria incompetencia para atender favorablemente la solicitud a la persona solicitante, asimismo le orientó al Colegio de Bachilleres del Estado de México, como el Sujetos Obligados competente para generar, administrar o poseer la información que es de su interés, siendo de vital importancia señalar que la facultad de orientación a las personas solicitantes para que formulen su solicitud ante el Sujeto Obligado competente es potestativa; se concluye que motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** son infundados, por lo que resulta procedente *confirmar* la respuesta proporcionada a la solicitud de información **00172/SF/IP/2025**.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 fracción II, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, 185 fracción I, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria, 1, 81, 82 fracciones I y III, 119, 127, 128, 129, 133, y 137 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultan **infundados** los motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **02344/INFOEM/IP/RR/2025**; por lo que, en términos de los argumentos señalados en el **Considerando Tercero**, se **Confirma** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado.**

**Segundo**. **Notifíquese,** vía **SAIMEX,** al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado** para su conocimiento, la presente resolución.

**Tercero.  Notifíquese** vía **SAIMEX,** a **la parte** **Recurrente** la presente resolución, así como que de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. BONILLLA LÓPEZ Miguel. *Los principios Constitucionales del Juicio de Amparo II.* México. 2009. UNAM. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gabino Fraga, Derecho administrativo, 29ª ed. Porrúa, México, 1990, p. 198 [↑](#footnote-ref-2)